

## ITALIA

### ¿CUÁNTO CUESTA DE VERDAD LA “CASSA INTEGRAZIONE”?<sup>18</sup>

El sistema de “Cassa Integrazione In deroga” (sistema de sustitución de rentas en casos excepcionales que no están cubiertos por los modelos ordinarios y extraordinarios de la Cassa Integrazione) y la indemnización de “mobilità In deroga” (expedientes de regulación de empleo colectivos fuera de los recursos ordinarios de “mobilità”), creadas por el Gobierno de Silvio Berlusconi en el 2008 se habían constituido como una herramienta temporal para ayudar, en la fase más aguda de la crisis, a los trabajadores de las pequeñas empresas y a los sectores que no están cubiertos por los sistemas de amortiguación social ordinarios (empresas de más de 15 trabajadores en sectores industriales y servicios). La intención era justa: establecer un colchón temporal para los trabajadores más débiles. Y en parte ha resultado así, pero, al final, el sistema se ha ido degenerando. Los instrumentos “in deroga” se han transformado en un subsidio permanente que absorbe cada año miles de millones de euros. Un mecanismo fuera de control que a menudo sirve solo para acompañar a los trabajadores hasta el acceso a la pensión, en algunas ocasiones durante un número desproporcionado de años, en vez de ayudarles a encontrar una nueva ocupación.

Es la fotografía que surge de la ponencia del Tribunal de Cuentas, expuesta por el Asesor Giovanni Coppola, sobre “La evolución del sistema de los amortiguadores sociales” que analiza la situación de los últimos 5 años. “Desde enero de 2009 a julio de 2013 el coste de todos los instrumentos “in deroga” ha alcanzado 5.780 millones de euros”. Un “crecimiento exponencial” de horas de amortiguadores sociales “in deroga” autorizadas: de 121 millones de horas en 2009 al máximo de 370 millones de horas en 2010, para seguir después hasta 2013 con más de 300 millones de horas al año. Un tercio de todas las horas autorizadas cada año para todo el Sistema de “Cassa Integrazione (alrededor de 1.000 millones) ha ido dirigido al modelo “Cassa In deroga”. Con un gasto cada vez más elevado: de 830 millones desembolsados por el Estado al Instituto Nacional de Previsión Social (que abona el subsidio) en el 2009, a los 2.500 millones de 2013. Importe que no es ya suficiente, como lo demuestra el hecho de que el Gobierno en la actualidad se encuentre a la búsqueda de 1.000 millones más para hacer frente a las solicitudes de las Regiones para 2014. Cantidad que, a diferencia de los de los otros instrumentos ordinarios, no tienen a sus espaldas las cotizaciones de las empresas, sino que recaen sobre la fiscalidad general, esto es, sobre todos los contribuyentes.

En el periodo de 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012, se lee en la ponencia, se han tramitado en total alrededor de 1.200 expedientes de “Cassa Integrazione In deroga” y 144.000 de indemnización de “mobilità in deroga”. La mitad de las prestaciones han ido a parar a cuatro Regiones: Lombardía, Veneto, Emilia Romagna y Piamonte. Sin embargo, todas las regiones meridionales, con excepción de Campania, “muestran un porcentaje de trabajadores beneficiarios de subsidios por despido (mobilità in deroga) superior a la media nacional”. Ya que un trabajador puede contar con más de una prestación, el número de beneficiarios en los cuatro años 2009-2012 es más bajo que el total de expedientes: se trata, de hecho, de 824.179 trabajadores, el 59,7% hombres. Alrededor de 310.000 personas se han beneficiado de más de una prestación in deroga.

Según las indicaciones de la Comisión Europea y el Acuerdo Estado-Regiones de 2009, se debe “asignar un papel preponderante a la individualización y a la calidad en las políticas activas dirigidas a los trabajadores” beneficiarios de los amortiguadores in deroga. En realidad, subraya el Tribunal de Cuentas, “la mayor parte de las intervenciones ha tenido

<sup>18</sup> Artículo del Corriere Della Sera 6 de mayo de 2014

que ver con una formación básica y generalista” mientras “menor relevancia tienen las acciones que van dirigidas a la efectiva recolocación en el mercado de trabajo”: solo el 5,6% ha recibido una “oferta de acompañamiento” a una nueva ocupación. En las conclusiones de la ponencia se lee: “muy a menudo se asiste al uso de la Cassa Integrazione como una prolongación de la vida laboral”, una clase de cuidado terapéutico para las empresas sin futuro. Por añadidura con un efecto de “canibalización” de los instrumentos ordinarios, como se ha demostrado por la “práctica común de aprobar periodos en Cassa Integrazione In deroga más largos de los establecidos inicialmente y a conceder prórrogas. Sin contar todos los casos en los que los instrumentos “In deroga” se suman a los ordinarios cuando las grandes empresas han agotado los plazos de duración. Trabajadores apartados durante años, con un “efecto desincentivador para la búsqueda de un nuevo empleo”. “Ni siquiera, por otro lado, las políticas activas aparecen en grado de realizar una inversión de tendencia”. Se permanece así en “un limbo dantesco”, se lee en el informe. En algunos casos, “como por ejemplo en el sector del transporte aéreo, los acuerdos para beneficiarse de los instrumentos “In deroga” se han resuelto de forma masiva con un anticipo de la pensión, lo que supone un elevado coste a cargo de la colectividad”. Y no acaba ahí, porque en la negociación Alitalia-Etihad (actuales negociaciones para la compra de parte de Alitalia por capital extranjero) se habla de despedir a otros miles de trabajadores. ¿Otro ejemplo? La “Cassa In deroga” para los trabajadores de la Fiat de Termini Imerese (cerrada en 2011) que se añade a los dos años de Cassa Extraordinaria sin que aún haya ninguna perspectiva de volver al trabajo.

La reforma es urgente. El Gobierno Letta ha dejado en herencia un decreto interministerial puesto a punto por el entonces Secretario de Estado de Trabajo, Carlo dell’Aringa, con restricciones para la concesión y la duración de la “Cassa In deroga”. Hasta ahora bastaba el acuerdo entre las empresas y los sindicatos con el ok de las Regiones, en un mecanismo de “irresponsabilidad de éstas últimas, más allá de las buenas intenciones, que toman decisiones con el dinero de otros, es decir, de la colectividad” explica Carlo Dell’Aringa. Ese decreto, que no pudo salir por el brusco final del Gobierno Letta, ha permanecido en un cajón en espera de la reforma de los amortiguadores sociales prevista en la Ley de bases aprobada por el ejecutivo Renzi. Mientras tanto no se sabe dónde encontrar otros 1.000 millones “in deroga” para 2014.